

UNA HISTORIA POLÍTICA DE PANAMÁ

MOVIMIENTOS POPULARES Y MILITARISMO EN PANAMÁ



Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

En los cinco siglos de historia de Panamá, su posición geográfica ha sido cotizada por los imperios con proyectos de expansión comercial y militar globales. Sobre sus costas se establecieron intereses que aprovechaban el Istmo para realizar sus transacciones y, al mismo tiempo, las guarniciones necesarias para defender la posición estratégica. Los trabajadores manifestaban su descontento con la subordinación en forma creciente. Quizás fue a mediados del siglo XX cuando estas búsquedas por alternativas políticas llegaron a su punto culminante.

El presente trabajo lo dividimos en siete secciones. La primera sección contiene una breve historia de Panamá. En la siguiente sección, abordaremos la lógica de los movimientos populares entre 1989 y 2014. El año 1989 fue marcado por la invasión militar norteamericana más reciente.

En la cuarta sección se hará un breve análisis de las elecciones de 2014 y el significado para el futuro inmediato. En la quinta sección se presentará la situación de la educación y

su relación con los movimientos sociales de Panamá. En la sexta sección se estudiará la relación entre pobreza y las luchas de los sectores subordinados. La última sección aborda el militarismo que, al igual que a principios del siglo XVI, sigue siendo la clave para entender a Panamá.

Palabras Claves

Panamá, Militarismo, Movimientos sociales, Pobreza, Educación

Historia

Panamá tiene una historia muy particular debido, en gran parte, a la posición geográfica estratégica que ocupa en relación con las rutas del comercio marítimo mundial desde la conquista y colonización de América a principios del siglo XVI. La presencia de los movimientos sociales en el Istmo de Panamá también se remonta al siglo XVI, según el historiador Alfredo Castellero Calvo. Los intereses de los colonizadores agropecuarios españoles a mediados del siglo XVI chocaron con los intereses de la Corona española, más interesada en el rol estratégico del Istmo como paso de metales preciosos. Esta contradicción se acoplaba a los movimientos libertarios de la población africana traída al istmo en calidad de esclavos, así como las luchas de los pueblos indígenas para conservar sus tierras. Aplastada la 'rebeldía' de los colonos, los 'cimarrones' y pueblos indígenas fueron contenidos en los márgenes del istmo (Darién y la cordillera al oeste del país). En el siglo XVIII se sumaron a la permanente desestabilización en las 'fronteras', el movimiento de los artesanos, profesionales y pequeños comerciantes del 'arrabal' de las ciudades terminales de la ruta de tránsito. Igualmente, en el siglo XIX aparece un movimiento de pequeños productores agrícolas en la península de Azuero (Los Santos) que se enfrenta a intereses latifundistas de las provincias vecinas. Los primeros son apoyados paradójicamente por la élite 'rentista' de la ciudad de Panamá que constituye su mercado principal. Igualmente, por los contrabandistas del paso de Toabré, en la provincia de Coclé, que alimentan el comercio ilegal entre Jamaica y el Perú.

La crisis de fines del siglo XVIII y las guerras de independencia de los primeros 25 años del siglo XIX reflejaban parcialmente los cambios en la correlación de fuerzas sociales a escala internacional. En el istmo, 'rentistas' y 'latifundistas' se unieron en un pacto accidental para separarse de España y unirse al proyecto bolivariano de la Gran Colombia. La alianza desde arriba se estructuró en torno a la estrategia de contener el creciente papel político de los de 'abajo', del arrabal y de los pequeños productores agrícolas en la coyuntura marcada por las guerras de independencia. A pesar de la unión accidental entre rentistas y latifundistas y su unión a Bogotá, las guerras civiles que involucran a ambos sectores se prolongaron a lo largo del siglo XIX.

En este contexto hace su aparición EEUU con sus barcos de guerra e interés en controlar la ruta que une los dos océanos. La influencia de EEUU desde mediados del siglo XIX impactó fuertemente el desarrollo político y económico del Istmo. En el siglo XIX apoyó a los sectores de la elite rentista cuyos intereses coincidían con los suyos. Fueron numerosas las intervenciones en el Istmo a lo largo del decimonono. Todas para proteger sus intereses y la de sus aliados concentrados en la ciudad de Panamá.

En 1903 rentistas (liberales) y latifundistas (conservadores) se unieron para separarse de Colombia. En esa coyuntura, EEUU logró establecer mediante un tratado negociado con la elite rentista una 'zona' jurídica de acción exclusiva para construir, operar y defender un canal interoceánico: La Zona del Canal. El Tratado del Canal Bunau Varilla - Hay fue el instrumento jurídico que utilizó EEUU para ocupar militarmente el país y utilizar el istmo como trampolín para sus aventuras guerreras a escala mundial así como para desestabilizar gobiernos en la región latinoamericana. Además, el Tratado sirvió para reprimir los movimientos populares del arrabal, de los pequeños productores y de las clases trabajadoras.

En enero de 1964 las fuerzas sociales reprimidas estallaron en una manifestación masiva contra la ocupación militar de EEUU. Como consecuencia se logró redefinir las relaciones

entre ambos países y surgió una nueva correlación de fuerzas sociales. La 'Zona del Canal' fue desmantelada en 1979 mediante los Tratados Torrijos-Carter. Igualmente, en 1999 fueron evacuadas todas las bases militares y la administración del Canal se transfirió al gobierno panameño.

En el período de transición (1977-1999), EEUU invadió militarmente a Panamá (1989) e impuso un sistema de gobierno favorable a sus intereses. Los partidos que concurren a las elecciones que se celebran cada cinco años, desde 1994, tienen programas afines al 'Consenso de Washington': política neoliberal, políticas sociales de exclusión y una política exterior alineada con EEUU. En la campaña electoral que culminó en mayo de 2014, los candidatos de los partidos tradicionales expresaron, en forma explícita, su compromiso de permitir la creciente presencia militar norteamericana en Panamá, 'sintonizar' los programas curriculares a los intereses de EEUU y a eliminar los sectores productivos de la economía.

Mediante acuerdos aprobados por la Asamblea de Diputados y por decretos ejecutivos, EEUU construyó 12 bases militares en ambas costas del país entre 2006 y 2014. La más reciente, la base de Punta Coco, en el Golfo de Panamá, fue construida por EEUU a un costo de US\$90 millones e inaugurada en febrero de 2014. Igualmente, desde 2006 los gobiernos panameños desataron una ofensiva contra los programas de educación nacional. Por un lado, reprimieron los movimientos estudiantiles y prohibió sus organizaciones. Por el otro, eliminó cursos en el *pensum* como Relaciones entre Panamá y EEUU, así como otras materias básicas. El curso de Relaciones entre Panamá y EEUU le permitía a docentes y alumnos repasar en forma crítica la historia panameña del siglo XX y proponer opciones para el futuro.

La sociedad panameña tiene raíces campesinas muy fuertes, a pesar del papel dirigente de una pequeña elite comercial, afincada principalmente en la ciudad de Panamá. A mediados del siglo XX una serie de factores influyeron para que Panamá experimentara un

proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Este proceso (1935-1975) dio lugar a la aparición de una burguesía nacional (con aspiraciones de convertir el país en su mercado exclusivo) y de una clase obrera que se concentró en las áreas productivas (urbanas y rurales). Las inversiones en el sector productivo fueron, en gran parte, el resultado de la transferencia tecnológica de EEUU y la participación de capitales de la elite 'rentista'. El desarrollo industrial y la burguesía nacional no tardaron mucho en revolucionar el sistema educativo, los servicios de salud y el transporte. Al mismo tiempo transformó la correlación de fuerzas sociales y la composición tradicional de las clases subordinadas y sus tácticas políticas.

La alianza entre el arrabal urbano y la masa de pequeños productores rurales que se habían unido en el Partido Liberal - radical y popular entre 1850 y 1930 - para reivindicar sus intereses, fue reemplazada por nuevas organizaciones políticas con ideologías más radicales, influenciadas por los movimientos obreros internacionales. EEUU, las elites 'rentistas' conservadoras y la burguesía nacional se unieron para enfrentar y reprimir la creciente clase obrera y su política de alianzas con los sectores populares del país. La alianza no duró mucho e hizo crisis en 1968 con el golpe militar que reclutó a los representantes de la burguesía nacional para que organizara un gobierno que pactara con los sectores populares.

El período entre 1970 y 1981, dominado por el liderazgo del general Omar Torrijos, jefe de la Guardia Nacional, se caracterizó por impulsar un populismo progresista. Se incorporaron grupos representativos de los sectores populares a las instancias gubernamentales. Se reformó el código laboral y se creó el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO). Igualmente, se crearon cerca de 250 Asentamientos Campesinos y una Asamblea de Representantes de más de 500 corregimientos (instancia política administrativos más pequeños del país). El desarrollo de las políticas productivas generó una redistribución de las nuevas riquezas que generaba la economía. Torrijos

murió en 1981 en un accidente aéreo que muchos consideran un atentado ejecutado por EEUU.

La segunda mitad de la década de 1980 se convirtió en una batalla entre las nuevas Fuerzas de Defensa (FDP), creadas en 1983, aliadas a sectores debilitados de la burguesía nacional junto con algunos sectores populares, contra EEUU y las elites 'rentistas' que aspiraban a recuperar su 'hegemonía perdida'. Torrijos creó en 1978 el Partido Revolucionario Democrático (PRD) para servir de base política en defensa de lo que llamaba el 'proceso'. A partir de 1983, la oposición política tradicional se reagrupó en los partidos suspendidos después del golpe de 1968. El capital financiero local junto con los partidos de oposición organizaron, en 1987, la llamada 'Cruzada Civilista' encargada de movilizar las protestas callejeras. Los sectores populares, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron levantar una alternativa propia. Tras una ofensiva de 'bajo perfil' y una campaña mediática internacional, EEUU invadió militarmente a Panamá en diciembre de 1989 colocando en la dirección política del país a las viejas elites.

Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos asesorados por instituciones norteamericanas iniciaron, a partir de 1990, una transferencia de riquezas de las clases trabajadoras al sector financiero. Como consecuencia la pobreza se agudizó, las tasas de desigualdad se incrementaron y el empleo informal se convirtió en la norma en las relaciones con los trabajadores. El Código laboral fue reformado, los asentamientos campesinos desbandados y las políticas sociales eliminadas.

Los movimientos populares entre 1990 y 2014

A partir de 1990 las reivindicaciones de los movimientos populares, representados por las organizaciones sindicales, gremios profesionales (educadores, médicos y otros), asociaciones estudiantiles y campesinos, entre otros, fue objeto de una represión que

asemejaba una operación pinzas. Por un lado, las organizaciones populares fueron objeto de una represión sistemática por parte de los gobiernos controlados por la elite rentista.

Por el otro, las políticas neoliberales como la flexibilización, desregulación y privatización (que se aplicaban a escala mundial) debilitaron a los trabajadores y otros sectores populares. La organización sindical fue desalentada abiertamente por los gobiernos. Muchas plantas manufactureras fueron cerradas y otras fueron vendidas a capitales extranjeros. El sector industrial (secundario) de la economía disminuyó del 20 por ciento que representaba en las décadas de 1960 y 1970 al 8 por ciento en los primeros años del siglo XXI.

La política de privatizar los servicios sociales (como educación, seguridad social y salud) movilizó a la población en defensa de sus conquistas. Encabezados por los gremios de educadores y médicos, se mitigaron parcialmente las políticas contrarias a los intereses populares. A pesar de las luchas que tuvieron su expresión callejera, los gobiernos lograron externalizar los servicios de salud, privatizar el sistema de pensiones y crear el sistema 'público-privado' en el sector de la educación. Como consecuencia, la calidad de los servicios sociales disminuyó y perjudicó a la población.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) continuó la política represiva de los gobiernos post-invasión que lo precedieron. En 2010 reprimió a los trabajadores de la empresa bananera Bocas Fruit Co., en Changuinola, Bocas del Toro. La mayoría de los trabajadores de las bananeras son originarios del pueblo indígena ngobe. La represión de los militares del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) dejó un saldo de dos muertos y decenas de heridos. A principios de 2011, SENAFRONT repitió la acción represiva en San Félix, provincia de Chiriquí, con motivo de las protestas por la construcción de una hidroeléctrica en tierras de la comarca Ngobe-Buglé.

En 2012 reprimió a los trabajadores de la ciudad de Colón y nuevamente al pueblo indígena ngobe, con saldos fatales. Martinelli mantuvo, durante su gestión, en estado de

alerta a los campesinos, indígenas y trabajadores del país. Reprimió a los pescadores en Jaqué (Darién) y a los kunas en Miria Ubigandup. Durante el período de Martinelli, el Ministerio de Trabajo rechazó todas las solicitudes de los trabajadores para organizar sindicatos. Mientras que en las décadas de 1960 y 1970 se inscribía un promedio de 80 sindicatos por año, en las décadas que siguieron se redujo a sólo 20 sindicatos por año. Se llegó al extremo – entre 2009 y 2014 - de negarles a los trabajadores el derecho a sindicalizarse.

La represión es el resultado de la imposición sobre Panamá de las políticas de seguridad nacional de EEUU. Mientras se reprimía a trabajadores, campesinos y estudiantes, entre 2008 y 2014 se construyeron 11 bases aeronavales y se realizaron anualmente maniobras conjuntas de Panamá con el Comando Sur de EEUU en territorio nacional. Además, se realizan desde mediados de la primera década del siglo XXI, operaciones militares colombo panameñas, dirigidas por EEUU.

Las políticas económicas están desintegrando a la familia panameña y desarticulando a las comunidades. Han creado un campo fértil para la expansión del crimen organizado. En la actualidad, la corrupción ha penetrado las relaciones gobierno-empresa a tal grado que hasta los puestos de elección pública se venden en el mercado al mejor postor. El país se publicita internacionalmente – en forma abierta - como un centro para hacer negocios, blanquear dinero sucio y para negocios relacionados con ‘tráfico de personas’.

En los barrios, el crimen organizado recluta niños, adolescentes y jóvenes que han perdido sus hogares por culpa de las políticas neoliberales. Operan en escuelas abandonadas, en antiguos centros comunitarios y montan casinos, cantinas, prostíbulos y distribuidores de droga con la complicidad de las autoridades locales, municipales y nacionales.

Los jóvenes panameños son encerrados en los centros penitenciarios donde son víctimas de torturas y reciben una preparación profesional informal para continuar una vida

delictiva al servicio del crimen organizado y sus protectores. Los adolescentes son enviados a Centros de Cumplimiento, donde no existe autoridad ni derechos humanos. Actualmente, hay una población carcelaria de 12 mil personas, la mitad son menores de 25 años de edad. Más del 50 por ciento de los privados de libertad son casos de posesión o comercialización de marijuana o derivados de la cocaína.

Las elecciones de 2014

La victoria electoral en Panamá, el 4 de mayo, del *panameñista* Juan C. Varela (39 por ciento de los votos) fue, sin duda, el hecho más importante del torneo celebrado en Panamá. La derrota del candidato oficial, José Domingo Arias (31 por ciento), fue recibida con alivio, especialmente por sectores del gran capital panameño. No tanto por lo que representaba el aspirante sino por lo que consideraban un intento del presidente saliente, Ricardo Martinelli, para quedarse en el poder. A su vez, Juan C. Navarro (28 por ciento) llevó su nave partidista – el Partido Revolucionario Democrático (PRD) - a una estrepitosa derrota, inesperada por los observadores políticos.

La campaña electoral de 2014 presenció por primera vez en 30 años (desde 1984) la postulación de candidatos de los sectores progresistas. Juan Jované, del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), desarrolló su campaña sin apoyo financiero, pero logró calar en sectores importantes de la sociedad panameña. Su discurso se dirigió a las causas de los problemas que tiene el país y que el pueblo está sufriendo. Denunció el saqueo de las arcas fiscales por la oligarquía financiera, que apoyó económicamente a los tres partidos mayoritarios del país. Prometió poner fin a la corrupción que está llevando al país al borde del colapso tanto moral como material. También señaló que la única manera de rescatar de la bancarrota a los sectores productivos de la economía – el agro y la industria – era denunciando y saliéndose del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Su campaña hizo énfasis en el estado ruinoso en que se encuentran los programas educativos y de salud del país. Las escuelas están

literalmente colapsadas y los centros de salud no cuentan con equipos o materiales de trabajo.

Genaro López, dirigente obrero de la construcción, obtuvo muchos menos votos de los esperados. Se calculaba que capturaría por lo menos el 4 por ciento del electorado, para poder consolidar el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) y elegir por lo menos un diputado a la Asamblea Nacional. Es probable que el discurso que buscó un equilibrio en sus propuestas terminó perjudicando las aspiraciones electorales de López. Siguiendo los ejemplos de Lula, Sánchez Cerén y Mojica no se pronunció abiertamente de izquierda y partidario de cambios radicales. Quienes podrían haber votado por una alternativa, prefirieron inclinarse a favor del ‘voto castigo’. Había que asegurar que Martinelli no regresara a la Presidencia, sobre las espaldas de su pupilo o de la mano de su señora, candidata a la Vice-presidencia.

El nuevo presidente, Juan C.Varela, tiene una política muy parecida si no idéntica a la de Martinelli. Contrasta, sin embargo, el estilo que hasta ahora ha presentado al país. Pero Varela está sujeto a las políticas que emanan de EEUU en materia económica, social y militar. Incluso, su militancia en el Opus Dei, una orden conservadora de la Iglesia católica, es bien vista por Washington.

Durante su campaña, Varela no se refirió a los problemas del Canal de Panamá, a la creciente militarización extranjera del país, ni a la crisis del agro. En cambio, destacó su compromiso de reducir el costo de la canasta básica, poner fin a la corrupción y desarrollar proyectos de vivienda social. Jované declaró – en la noche en que se anunció la victoria de Varela - que el MIREN se convertirá en la ‘conciencia social’ del país para exigir que el nuevo presidente (2014-2019) cumpla con todas sus promesas.

Si Varela quiere hacer un gobierno que logre movilizar a la población panameña, tiene que enfocar su atención en el problema clave del país: La falta de empleos decentes y productivos disponible para la juventud. Para ello tiene que modificar sustancialmente los programas neoliberales aplicados por los últimos cuatro gobiernos (20 años). Los programas de dádivas son concebidos para emergencias coyunturales. Sin embargo, Varela ve estos programas como los pilares de su gobierno. Tendrá que modificar esa visión y desarrollar una política nueva en que los jóvenes panameños, trabajando, produciendo y estudiando, se conviertan en los pilares de su gestión gubernamental.

El próximo gobierno panameño tiene que enfrentarse a los mismos problemas que no fueron resueltos por sus predecesores. El hecho de que no encontraron soluciones no fue por incapacidad gubernamental ni por obstáculos imposibles de remontar. Los problemas más graves y que requieren medidas urgentes no fueron resueltos porque no estaban en la agenda de los gobiernos de los últimos 25 años.

A pesar de los discursos, los programas y las promesas, los gobiernos no tienen como objetivo resolver los problemas del país y mucho menos los problemas de la gente. Desde hace 25 años el problema que requiere la solución más urgente es la creciente pérdida de fuentes de trabajo decentes. A falta de empleos, se deteriora el tejido social del país, comenzando por la familia. Si la familia se desintegra, lo mismo ocurre a nivel de la comunidad. Panamá, según las estadísticas, se encuentra en una grave crisis como consecuencia de que el 50 por ciento de los trabajadores del país son informales (desempleados de hecho).

El programa del presidente Juan C. Varela no contempla a los sectores populares. Tampoco contempla la formación de un equipo que trabaje con las organizaciones más combativas del país. Entre estos se destacan sindicatos, gremios, asociaciones, pueblos indígenas y grupos con agendas de género. Más bien, el equipo tiene una larga trayectoria como funcionarios a todos los niveles en los distintos gobiernos del pasado reciente. En

1990 los más veteranos participaron en la administración del presidente Endara (1990-1994). Después, muchos se foguearon en el equipo de la presidente Mireya Moscoso (1999-2004). Entre 2009 y 2012, durante los primeros 26 meses de la administración de Martinelli, formaban parte de su equipo los funcionarios que ahora ostentarán los rangos más altos. El presidente Varela nombró a Alemán Healy, como ministro de la Presidencia, quien fue vice-canciller del actual presidente Martinelli. Igualmente, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcideo de la Guardia, fue viceministro en el gabinete del presidente saliente.

Por un lado, es saludable que los colaboradores del presidente entrante tengan experiencia. Por el otro, sin embargo, despierta sospechas el hecho que sus colaboradores participaron en la represión de los movimientos populares de los tres últimos lustros. El nuevo ocupante del Palacio de las Garzas está rodeado de políticos que responden a los intereses de los grandes emporios locales e internacionales. Los anuncios hechos por los nuevos ministros designados apuntan a que continuarán las políticas del gobierno anterior.

Martinelli presidió el traslado más monumental de riquezas en la historia del país de los sectores más pobres del país (75 por ciento de la población) al 2 por ciento más rico. Martinelli administró casi 80 mil millones de dólares (el presupuesto nacional entre 2009 y 2014) y presidió un período que produjo 170 mil millones, sin incluir las riquezas que entraron a la economía por la vía ilegal. El 2 por ciento más rico del país se apropió del 90 por ciento de ese crecimiento.

Los programas “120 para los 65”, beca universal y otros que representan una subvención de 400 millones de dólares al año continuarán. Las subvenciones para quienes compran yates y aviones *jet* suman la misma cantidad. Cada empresario que invierte ilegalmente en la construcción de represas en tierras de la comarca Ngobe-Buglé – como Barro Blanco – recibe otra subvención de 400 millones de dólares. En total, las subvenciones a los

empresarios sumaron aproximadamente 5 mil millones de dólares en cada presupuesto del último lustro.

Educación

El nuevo presidente tiene que enfrentar el problema de la educación nacional. La cuestión educativa tiene 50 años de arrastre y no hay solución a la vista. La clase gobernante quiere convertir la educación en un negocio. Aún no hay manera de convencerlos que la educación es un servicio. Varela dice que hará un gobierno al servicio del país. Durante los cinco años de gobierno de Martinelli los gremios se enfrentaron con las políticas gubernamentales. Los gremios realizaron su última huelga faltando un mes para el fin de la gestión gubernamental de Martinelli. Los educadores paralizaron las escuelas y colegios del país exigiendo mejoras de los establecimientos escolares, cumplimiento de las promesas de incrementos salariales y revisión de los programas curriculares.

En su discurso ante la Asamblea Nacional de Diputados el 1º de julio de 2013, el presidente Ricardo Martinelli declaró que “si no transformamos la educación pública, no estaremos en condiciones de acompañar y fortalecer el proceso de crecimiento (económico) que vivimos”. Para lograr este objetivo, señaló que gobierno identificó dos objetivos básicos. El primero es garantizar una educación incluyente. Es decir, asegurar que todos los niños ingresen al sistema y que no lo abandonen. El segundo, elevar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles.

En su Congreso anual, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) examinó estos planteamientos y llegó a la conclusión de que el gobierno había fracasado en ambos casos. La deserción escolar sigue aumentando y la calidad de la educación continúa empeorando. En un documento de trabajo del Congreso, se comparó la situación de la educación en 2008 con la de 2012. La cobertura de la población en edad escolar sufrió una baja. Mientras que en 2008 el 85.1 por ciento de los niños estaban en las escuelas,

en 2012 la cifra bajo a sólo 84.7 por ciento. Todavía más alarmante, trabajando con cifras preliminares de 2013, se constató que en 2013 la tendencia siguió su curso. Según estimaciones, la población en edad escolar de ese año fue 992.574. Los informes sobre la matrícula inicial de 2013 indican que hubo 55,540 menos niños matriculados. Sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Educación, la tasa de escolarización en 2013 sólo alcanzó el 78.8 por ciento.

Según el documento discutido en el Congreso de A EVE, “la cobertura escolar en 2013 cayó de manera preocupante”. Dado el aumento de la población en edad escolar y el descenso sensitivo de las matrículas en los niveles primario y pre media en 2013 es presumible que la cobertura escolar disminuyó. “Es claro que durante este gobierno la inclusión (cobertura) no solo no aumentó, sino que en 2013 hizo crisis.

Con relación al segundo objetivo del gobierno, que es ‘elevar la calidad de la enseñanza en todos los niveles’, los indicadores oficiales revelan que este objetivo tampoco fue cumplido. Por ejemplo, mientras que en 2008 había 5,056 docentes no calificados en el sistema, en 2012 la cifra se elevó a 5,097 docentes. Para la A EVE es preocupante que el 53 por ciento de los docentes del nivel *prescolar* no está calificado. No se cumple con uno de los objetivos de su existencia, que es resolver algunos de los problemas que se presentan en el primer grado.

Otro serio problema que incide sobre la educación es la existencia y promoción de las escuelas ‘rancho’ o multigrado. En 2012, de las 2,971 escuelas oficiales del nivel primario en Panamá, el 71.4 por ciento eran escuelas multigrado. Las escuelas rancho se concentran en las áreas rurales (81.4 por ciento). En las áreas urbanas el 4.4 por ciento de las escuelas son multigrado.

El 23.3 por ciento, es decir, uno de cada cuatro, estudiantes están matriculados en escuelas multigrado primarias oficiales. En las áreas rural e indígena, 4 de cada 10 niños matriculados están asistiendo a escuelas de modalidad multigrado.

Esta modalidad, se ha extendido rápidamente, bajo el actual gobierno, a las escuelas de pre-media. El sistema escuelas rancho pasó de 33.5 por ciento en 2010 a 45.7 por ciento en 2012. En 2012 habían 279 escuelas oficiales de pre-media multigrado de un total de 610 escuelas de pre-media oficiales del país. La matrícula en estas escuelas es de 11,812 estudiantes que representan el 7.4 por ciento del total en las escuelas oficiales.

En el Congreso de la A EVE, el candidato independiente, en aquella fecha, a presidente de la República, Juan Jované, presentó su plan de trabajo en materia de educación. Lo primero, dijo, es “reconocer el derecho a la educación, como un derecho humano inalienable”. Para ese fin hay que “revertir todas las medidas existentes que hayan llevado a la tercerización y privatización en la esfera de los servicios de educación”. Casi todos los días el Ministerio de Educación publica resoluciones que tienden a socavar los cimientos del sistema escolar que se comenzó a construir hace cien años. En 2014 anunció la eliminación del bachillerato en Letras, erradicando cursos de Educación Física, Historia y Cívica.

Jované defendió el compromiso constitucional que fija un porcentaje del presupuesto general del Estado para la educación. En la actualidad, el gobierno destina a la educación sólo el 3 por ciento de su presupuesto. Esta suma debe elevarse al 12 por ciento si se quiere erradicar los problemas sociales del país.

Jované también señaló que crearía un Instituto de la Juventud y garantizaría el derecho a la libre organización de los estudiantes en todos los planteles del país. Restablecería dentro del programa académico obligatorio la asignatura de “Historia de las relaciones de

Panamá y EEUU". También aseguró que eliminaría todas las escuelas multigrado que discrimina a los más pobres.

Pobreza

En la actualidad, las distintas instancias públicas y privadas de Panamá utilizan indicadores desarrollados por el Banco Mundial para medir la pobreza. Esta institución norteamericana realizó tres encuestas para medir la pobreza (en 1997, 2003 y 2008). En 2013 el gobierno rechazó la solicitud del Banco Mundial para realizar un cuarto estudio.

Las tres encuestas midieron la pobreza por el lado del consumo y también tomando en cuenta el ingreso. Los dos indicadores se basan en la noción de que a mayor consumo en el mercado o mayor integración en el proceso de producción mercantil, hay un mejor nivel de vida.

La Encuesta de Hogares que realiza la Contraloría anualmente también presenta estadísticas sobre la pobreza en Panamá. En la actualidad, la pobreza - utilizando esta metodología - sitúa a cerca del 40 por ciento de los panameños por debajo de 'la línea de pobreza'.

En el caso de Panamá, la 'brecha' entre ricos y pobres tienden a ensancharse como consecuencia de las políticas que se aplican. La brecha podría disminuir con políticas integrales relativamente sencillas.

En primer lugar, orientar las políticas públicas hacia áreas productivas que generen empleos capaces de promover nuevas plazas de empleo (efecto multiplicador) en toda la extensión de la geografía nacional. En vez de tener políticas públicas asociadas a la especulación, a las obras gigantescas y a los juegos del azar para 'turistas', se puede invertir en el agro, en la agro-industria y en la manufactura.

En segundo lugar, hay que reducir las subvenciones y apoyo crediticio que reciben las actividades especulativas empresariales. Estas sumaron aproximadamente 2 mil millones de dólares (lo equivalente a los ingresos de la ACP) en 2013. Si estos recursos se invierten en el sector productivo de Panamá, se reduciría la pobreza en más del 50 por ciento. De paso, se pondría fin a la ola de crimen, a la epidemia de dengue, a las altas tasas de deserción escolar, al abandono de las tierras productivas y a la crisis del transporte urbano (aunque en este último punto hay que estudiar el impacto que tiene el nuevo Metro inaugurado a mediados de 2014).

La pobreza no es una industria que beneficie al 50 por ciento de panameños que viven debajo de la llamada 'línea de pobreza' o que apenas la superan. Esta afirmación es una propuesta ideológica de los grupos más ricos del país. Hay sectores empresariales que han convertido los programas de mitigación de la pobreza concebidas por el Banco Mundial en una industria para su beneficio.

No hay panameño, sin embargo, que prefiera tener un empleo decente a vivir de las 'migajas' que reparten los gobernantes.

Con una inversión anual de 500 millones de dólares anuales en el sector productivo de la sociedad, en cinco años se puede eliminar la pobreza extrema y parte importante de la pobreza, en general, en Panamá.

La pobreza puede reducirse mediante el impulso de programas que cubran la geografía del país. Por ejemplo, la construcción del próximo puerto del Canal de Panamá en un lugar apropiado del interior del país. Si se hace en la provincia de Coclé, generaría desarrollo tanto en esa provincia como en Panamá Oeste, creando empleo. Otro ejemplo, es transformar la tecnología a cielo abierto de la minera que explota Petaquilla y convertirla en una actividad integrada a la economía nacional.

Con una política adecuada se puede eliminar la pobreza en menos de una generación. La actual correlación de fuerzas entre el 1 por ciento de los más ricos del país (y sus aliados extranjeros) y el resto (99 por ciento) no lo permite. Hay que alterar esa relación social que predomina en la actualidad para eliminar la pobreza.

La actual política que privilegia la especulación es el producto de las políticas económicas que se comenzaron a aplicar en Panamá e principios de la década de 1980 (los programa de ajuste económico, PAE). La misma fue consolidada a mediados de la década de 1990 (bajo la presidencia de Pérez Balladares y su ministro Guillermo Chapman. Con los ingresos crecientes del Canal de Panamá en la primera década del presente siglo, muchos cayeron bajo los efectos del espejismo y creyeron equivocadamente que el modelo de corrupción y saqueo se había establecido para siempre. Sin embargo, fue sólo una ilusión.

La estructura social, tal como la hemos conocido en los últimos 25 años (desde la invasión militar norteamericana de 1989), se resquebrajará. No sabemos qué sociedad surgirá de esos cambios. Hay que formar las nuevas generaciones para que estén preparadas para asumir los nuevos retos que representa esa crisis y llevar el país por el mejor camino, para beneficio de todos los panameños.

Militarismo

EEUU insiste en realizar anualmente maniobras militares en torno al Canal de Panamá con supuestos “aliados” panameños y de otros 15 países latinoamericanos. Durante estos ‘juegos’ militares EEUU asume abiertamente el control territorial del país. En el proceso delega a terceros países responsabilidades soberanas panameñas.

En la Constitución Política panameña se establece en forma explícita que el país no tiene un ejército. Igualmente, señala que la soberanía es inalienable e intransferible. Panamá es

ocupada todos los años por tropas norteamericanas con el supuesto de que el Canal está en peligro. Según un comunicado del Comando Sur (con base en Miami), “el Ejército Sur de EEUU y las fuerzas armadas y de seguridad de 17 naciones participan del ejercicio anual Panamax”.

El comunicado plantea objetivos contradictorios y sin mayor sentido: “Este ejercicio multinacional reúne a las fuerzas navales, aéreas y terrestres en una operación conjunta y combinada para defender el Canal de Panamá de ataques perpetrados por violentas organizaciones extremistas de carácter ficticio, así como también responder ante catástrofes naturales”.

Entre los grupos ficticios “extremistas”, los militares norteamericanos identifican a campesinos e indígenas panameños. Estos son considerados aliados de fuerzas insurgentes de Colombia y traficantes de drogas ilícitas que operan en los círculos financieros y políticos de EEUU. En el operativo Panamax, dirigido por EEUU, tropas colombianas asumen la dirección del componente terrestre del ejercicio. El Comando Sur de EEUU también informó que “las fuerzas militares brasileñas dirigen el componente marítimo”. Es decir, el territorio nacional y las costas panameñas quedan bajo la responsabilidad soberana de terceros países. “El comandante de componente marítimo de la Fuerza Multinacional para Panamax 2012 fue el contralmirante Wilson Pereira de Lima Filho de Brasil”.

En otro comunicado, los militares norteamericanos se refieren abiertamente al derecho que tiene EEUU de intervenir en forma unilateral en Panamá “cuando se considere necesario por el gobierno de Panamá y otras naciones de la región”. El operativo llamado “Panamax, afirman los militares norteamericanos, proporciona oportunidades para que las naciones participantes se unan para contrarrestar las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales”.

La Ley que creó el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Panamá en 2008 expresa la naturaleza militarista y represiva del Estado panameño. El Servicio de Inteligencia y Seguridad es producto de la evolución de las relaciones militares entre Panamá y EEUU desde que éste invadió a Panamá en 1989. Por un lado, los aparatos administrativos y de seguridad (el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aéreo-Naval y la Policía Nacional) del gobierno panameño se encuentran al servicio de los objetivos militares de EEUU en Panamá y la región latinoamericana, especialmente Colombia. Igualmente, el Servicio de Inteligencia panameño realiza tareas de espionaje dentro del país, dirigidos especialmente a infiltrar los movimientos sociales. En algunos casos, como fueron denunciados en los medios de comunicación, los agentes de espionaje también penetran los partidos políticos de oposición.

El estado panameño, desde la invasión militar de EEUU en 1989, no ha organizado estamentos de inteligencia o militares independientes de EEUU. Incluso, la Policía Nacional es asesorada por especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de Colombia, ambos en estrecha colaboración con el Comando Sur de EEUU.

En 1999 la presidente Mireya Moscoso autorizó el inicio de negociaciones con EEUU para la realización de maniobras militares y la construcción de bases con miras a intervenir en la guerra civil colombiana. Durante la gestión de Moscoso se aprobaron cuatro acuerdos militares con EEUU.

El primero de ellos fue el Tratado Alemán Healy-Becker, firmado en 2001, por medio del cual se estableció que las 16 agencias federales del gobierno de EEUU que participan en el Equipo Nacional de Respuesta (NRT, por sus siglas en inglés), entre las que sobresalen el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas, prestarán ayuda a Panamá en caso de incidentes de contaminación ambiental y accidentes en el Canal.

En febrero de 2002 ambos países firmaron otro Acuerdo complementario para patrullar en forma conjunta las aguas panameñas y perseguir naves sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas. El ministro de Relaciones Exteriores, José M. Alemán H., sostuvo que el acuerdo “permite la presencia de militares estadounidenses en suelo panameño sin que esto represente una violación a la soberanía”. Por su parte, el asesor del ministerio de Gobierno y Justicia, Marcel Salamín, amplió dicho comentario declarando que “los militares podrán circular uniformados, pero sin portar armas y serán sometidos a la jurisdicción panameña”. Agregó que se había alcanzado el acuerdo debido a que los norteamericanos habían desistido de su propuesta de permitir en Panamá la presencia de fuerzas militares visitantes.

Cuando aún se debatía sobre la legalidad o ilegalidad del Acuerdo Complementario de 2002, el gobierno dio a conocer la concertación de un nuevo acuerdo con EEUU. El 1º de abril del 2002 el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, firmó un acuerdo con el Departamento de Estado, la Agencia para la Protección del Ambiente y el Servicio de Guarda Costas de EEUU, con *Respecto a Ciertos Incidentes de Contaminación Ambiental en el área del Canal de Panamá*. Correspondió al embajador norteamericano Frederik A. Becker estampar su firma en representación de la parte norteamericana.

Según Herbert Nelson, “en el acuerdo, las partes reconocían la importancia que revestía el Canal de Panamá para el tráfico y comercio internacional y que cualquier incidente sobre contaminación de las aguas del Canal podía afectar la operación normal de los buques que transitaban por esta ruta. Como medida preventiva, la ACP solicitó a las agencias que forman parte del mecanismo de coordinación conocido como el Equipo Nacional de Respuesta (NRT) su asistencia en caso de una futura emergencia ambiental en el área del Canal de Panamá”.

En agosto de 2004, varios medios de comunicación reprodujeron despachos de agencias noticiosas informando que EEUU consideraba que una fuerza multinacional debería prepararse para defender el Canal de Panamá. Según la información, la vía acuática era un "punto sensible para un ataque terrorista por ser un activo estratégico para el comercio mundial".

Lo que más sorprendió fueron las declaraciones del gobierno panameño que suscribió la propuesta de EEUU. Según una declaración oficial de un alto funcionario del gobierno panameño, recogida por un despacho noticioso y publicado por un medio de comunicación de la capital, el gobierno panameño "no puede defender sólo el Canal, por lo que necesita el concurso de otras naciones".

La presidente Mireya Moscoso, faltando menos de dos semanas para abandonar el Palacio de las Garzas en 2004, aceptó la tesis norteamericana sobre la necesidad de militarizar nuevamente el Canal de Panamá y, de paso, regresar al status de país ocupado por las fuerzas armadas de EEUU que caracterizó el siglo XX. Para hacer cosas peores, otros seis países de la región latinoamericana suscribieron también la declaración del gobierno norteamericano. EEUU dio a conocer su posición después que se celebraran secretamente en aguas panameñas un conjunto de maniobras aéreas y navales en las que participaron unos 3,000 efectivos de las fuerzas aéreas y navales de EEUU, Honduras, Colombia, Chile, República Dominicana, Perú y Argentina. Panamá también participó con sus fuerzas aéreas y navales. Sin embargo, Panamá - según la Constitución vigente - no cuenta con fuerzas armadas.

En el caso de Chile, su gobierno o sus fuerzas armadas – que cuentan con un alto grado de autonomía en ese país del cono sur – insinuó su interés en instalar en las inmediaciones del Canal de Panamá una base militar con el aval y financiamiento de EEUU. Para algunos países de la región, la ocupación militar de Panamá tendría similitudes a la situación que caracteriza actualmente a Haití. EEUU ocupa ese país caribeño desde 2003 cuando

desembarcó tropas en esa isla y obligó a su presidente a abandonar el país. Varios países de la región latinoamericana han enviado efectivos de sus fuerzas armadas, respondiendo a una invitación de EEUU, para hacer actos de presencia militar simbólicos.

El comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur de EEUU, vicealmirante Vincent Smith, afirmó que el Canal de Panamá es un punto sensible para un ataque terrorista por ser un activo estratégico para el comercio mundial, lo que justificaría una fuerza multinacional para defenderlo. Smith agregó que "el Canal de Panamá es un puede ser objeto de un ataque terrorista por su importancia para el comercio".

Smith hizo sus declaraciones en la base naval Rodman en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. Habría dicho "que un ataque contra la vía interoceánica afectaría las economías de muchos países que usan la vía interoceánica".

Los acuerdos entre Panamá y EEUU han dado como resultado la construcción de 11 bases militares entre 2008 y 2014 sobre ambas costas del país. EEUU justifica la inversión como consecuencia del peligro que representa una "guerrilla narcoterrorista". Según el gobierno panameño, la base construida por EEUU en Punta Coco (en el archipiélago de Las Perlas) sobre un terreno que había sido "un puesto de las FARC", constituye una defensa contra los narcotraficantes.

Las instalaciones de Punta Coco se encuentran ubicadas en la parte sur de la Isla del Rey. Su operación es responsabilidad del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Comando Sur de EEUU. El costo de la base, asumida por el Comando Sur, se calcula entre \$73.5 y 90 millones.

Según el ministro de Seguridad Pública, J. Raúl Mulino, la nueva base aeronaval tendrá un importante pie de fuerza, además de poseer un amplio muelle y mantendrá lanchas interceptoras para el patrullaje constante en el sector. El subdirector del SENAN,

comisionado Luis Ruiz, manifestó que el puesto aeronaval tiene capacidad de mantener 60 unidades, aunque todavía no se había llegado a ese número. La estructura, tiene como ventaja la utilización de energía alternativa de paneles solares, energía eólica y una red de baterías de diesel. La base cuenta con pista de aterrizaje de avión, muelle, puesto de comunicación, una cafetería, dormitorios y oficinas. La base aéreo-naval reforzará el patrullaje en las comunidades costeras en un amplio sector de la provincia de Darién, fronterizo con Colombia.

En la isla Pedro González, a poca distancia de la base aeronaval de Punta Coco se produjeron choques entre los habitantes y efectivos militares panameños que fueron despachados por el SENAN. Varios comandos militares forzaron a la población a desalojar sus tierras agrícolas. El relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, advirtió que los “desalojos forzosos” en la isla de Pedro González suponen el primer paso “de una violación grave de un amplio conjunto de derechos humanos”. La ONU tomó nota también de los desalojos en las comunidades de Santa Clara y Pacora (provincia de Coclé). Según de Schutter, Panamá es signataria del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y está obligado a garantizar la vivienda y el acceso a los medios necesarios para que las poblaciones tengan una alimentación adecuada.

El conflicto en Pedro González, donde se mantienen fuerzas armadas aeronavales, se generó cuando la empresa Zoniro, de la familia Eleta, destruyó los cultivos de subsistencia en la pequeña finca de un vecino de la isla. La empresa ignora que los habitantes (“que residen desde hace más de 100 años en el área”) puedan cultivar o realizar cualquier tipo de actividad agrícola en una isla que la empresa está destinando a segundas residencias de lujo.

Bases aéreo navales en Panamá, según litoral
(Construidas entre 2008 y 2014)

Pacífico

Extremo Este		
	Puerto Piña	
	Isla Chaparra	
	Punta Coco	
Centro		
	Mensabé	
Oeste		
	Coiba	
	Quebrada de Piedra	

Atlántico

Extremo Este		
	Puerto Obaldía	
	El Porvenir	
Canal		
	Fuerte Sherman	
Oeste		
	Isla Colón	
	Chiriquí Grande	

Bibliografía

Historia

Alfredo Castillero C., 2004, *Historia general de Panamá*, Panamá: Comité del Centenario.
 Marco A. Gandásegui, hijo, 1990, *Las luchas obreras en Panamá (1840-1978)*, Panamá: CELA.
 Ricaurte Soler, 1988, *El pensamiento político en los siglos XIX y XX*, Panamá: Universidad de Panamá.
 Juan A. Tack, 1999, *El Canal de Panamá*, Panamá: Universidad de Panamá

Movimientos populares

Olmedo Beluche, 2009, "Reseña histórica de las reformas neoliberales a la legislación laboral panameña", *Tareas*, Nº133, septiembre-diciembre.
 Marco A. Gandásegui, hijo, 2004, "Los movimientos sociales en Panamá", *Panamá: Cien años de República*, Panamá: Universidad de Panamá.
 Iván Quintero, 2010. *Mercado de trabajo, flexibilidad y lucha obrera en Panamá*, Panamá: Suntracs.
 Anayansi Turner, 2009. "El derecho de huelga en el Canal de Panamá", *Tareas*, Nº 133, septiembre-diciembre.
 Rodelick Valdés, 2009. "Políticas indígenas y el Estado panameño", Alainet, Quito: Alainet, 22 de octubre.

Voces Ecológicas, 2010, “La batalla de Changuinola”, *Tareas*, N°136, (septiembre-diciembre).

Urania A. Ungo M., 2010, “Cambiar para que todo cambie: Una aproximación a la relación mujeres, política y cultura en Panamá”, en *Ciudadanía, políticas de género, cambio cultural e institucionalidad en Panamá*, (*Cuadernos de Ciencias Sociales*, N°1, Programa FLACSO Panamá).

Elecciones 2014

Lilian González G., (compiladora), 2014, *Balance de las elecciones 2014 en Panamá y desafíos de las fuerzas progresistas*, Panamá: FES y CELA (en imprenta).

Gerardo Solís, ed., 2012, *Reflexiones en un Panamá democrático*, Tomo II, Panamá: Tribunal Electoral.

Educación

Giovanna Benedetti, 2014, “La globalización de la educación y el fin de la historia”, *Tareas*, N°148 (en imprenta).

Elda de León y oros, 1999, *La educación panameña frente al próximo siglo*, Panamá: Universidad de Panamá /IDEN.

José Ángel Garrido, 2013, “El sistema de gestión de centros educativos”, Panamá: s/l.

Asociación de Educadores Veragüenses, 2014, *Informe a la Nación. La educación durante la administración Martinelli-Molinari*, Panamá: AEVE.

Gregorio A. Urriola C., 2013, “Perfil educativo de los grupos indígenas de Panamá”, *Tareas*, N° 144.

Pobreza

Banco Mundial, 2000, *Panamá. Estudio sobre pobreza*, Washington: Banco Mundial.

PNUD (R. P. De Barros, M. De Carvalho y S. Franco), 2003, *La igualdad como estrategia de combate a la pobreza en Panamá*, Panamá: PNUD.

Jorge E. Madrid y Artinelio Hernández, 2011, *Política social y pobreza indígena. Análisis cualitativo*, Panamá: UDELAS y SENACYT.

República de Panamá, Ministerio de Economía Finanzas, (MEF), 2005, *La pobreza en Panamá. Encuesta de niveles de vida*, Panamá: MEF.

Carlos Sobrado, 2000, “Desigualdad en Panamá”, en *Panamá: Estudio sobre pobreza*, Washington: Banco Mundial

Militarismo

Alfredo Castillero C., 2011, “Fortificaciones del Caribe panameño”, en *El patrimonio fortificado. Cádiz y el Caribe: Una relación transatlántica*, Alcalá: Universidad de Alcalá

Marco A. Gandásegui, hijo, 2004, “EEUU propone nuevamente una fuerza multinacional para defender el Canal de Panamá”, *ALAI-AMLATINA*, 23 de agosto.

John Lindsay-Poland, 2003, *Emperors in the Jungle: The Hidden History of the U.S. in Panama*, Durham, NC: Duke University Press.

Herbert George Nelson Austin, 2003, *Historia de las relaciones entre EEUU y Panamá (1995-2003)*, Panamá: CIDPA.

Carlos Pérez Morales, 2011, *El Canal de Panamá: Geopolítica y hegemonía*, Panamá: Editorial Universitaria.

Red Democracia Ciudadana, 2008, “Manifiesto”, *Panama News*, septiembre.

Ricarte Soler, 2008, “Panamá, nación y oligarquía”, en *Las clases sociales en Panamá*, Panamá: CELA.

Julio Yao, 2000, *El monopolio de EEUU sobre el Canal y la invasión a Panamá*. (Disponible en http://www.nodo50.org/caminoalternativo/documentos/PONENCIA_JULIO_YAO.pdf)

Julio Yao, 2002, “El Tratado Salas – Becker”, *El Panamá América*, 17 de abril.